

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados, de cada semana.

Se suscribe en esta capital, Imprenta de D. Francisco Paz, Fuente del Rey núm. 18.

En las demás provincias, en las principales librerías.

PRECIOS DE SUSCRICION, en Orense, por trimestre, 2 ESCUDOS.

— Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 ESCUDOS.

— Números sueltos, 150 MILÉSIMAS.

(Gaceta núm. 114.)

REGENCIA DEL REINO.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

LEYES.

D. Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes Soberanas, a todos los que las presentes vioren y entendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la Nación española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

TITULO PRIMERO.

Del estado de prevención y alarma.

CAPITULO PRIMERO.

SECCION PRIMERA.

Artículo 1.º Las disposiciones de esta ley serán aplicadas únicamente cuando se haya promulgado la ley de suspensión de garantías a que se refiere el art. 51 de la Constitución, y dejarán de aplicarse cuando dicha suspensión haya sido levantada por las Cortes.

Art. 2.º Son objeto de esta ley:

1.º Las medidas gubernativas que las Autoridades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden público, y para prevenir los delitos contra la Constitución del Estado, contra la seguridad interior y exterior del mismo, y contra el orden público, que la vigente ley penal condena.

2.º La competencia de los Jueces y Tribunales en las causas criminales que se formen sobre dichos delitos, y el procedimiento a que estas han de ajustarse.

SECCION SEGUNDA.

Art. 3.º Publicada la ley de suspensión de garantías a que se refiere el artículo 1.º, se considera declarado por el mismo hecho el estado de prevención, hallándose facultada desde este momento la Autoridad civil para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia considere convenientes a fin de asegurar el orden público.

Art. 4.º La Autoridad civil excitara por oficio a la judicial para que proceda desde luego contra los que comprenda que son responsables en algún sentido de los delitos expresados en el art. 2.º.

Art. 5.º Si se formaren grupos, dictará las medidas oportunas para su disolución, intimando a los autores y auxi-

liares de la agitación que se disuelvan, y en el caso de no ser obedecidos a la tercera intimación, utilizará la fuerza de que disponga, al efecto de restablecer la calma y dejar expedir la vía pública.

Art. 6.º Propondrá al Gobierno y en caso urgente acordará desde luego la suspensión de las publicaciones que preparen, excitem o auxilien la comisión de los delitos de que habla el art. 2.º de esta ley, y señaladamente los comprendidos en los artículos 167 y 174 del Código penal, dando cuenta al Gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares que encuentre de aquellas publicaciones, remitiéndolos con las personas responsables de los delitos expresados al Juzgado ordinario competente para los efectos de justicia.

Art. 7.º La Autoridad civil, en este estado, podrá detener y detendrá a cualquiera persona, si lo considerase necesario para la conservación del orden.

Los detenidos en esta forma no deberán confundirse con los presos y detenidos por delitos comunes.

Art. 8.º Podrá asimismo compeler a mudar de residencia o domicilio a las personas que considere peligrosas, o contra las que existan racionales sospechas de participación en dichos delitos.

El cambio de domicilio no podrá decretarse a más de 150 kilómetros de distancia del pueblo del compelido a mudarle.

Art. 9.º El destierro, que desde luego puede acordar la Autoridad a una distancia que no exceda de 250 kilómetros, se entenderá levantado de hecho y de derecho, así como el cambio de domicilio, terminado que haya el período de suspensión temporal de las garantías constitucionales, si antes no fuesen estas restablecidas.

Los motivos de las providencias a que se contraen este y los tres anteriores artículos se harán constar en acta que se levante, o expediente que se forme antes o después de llevarlas a ejecución.

Art. 10.º La Autoridad civil podrá también entrar en el domicilio de cualquier español o extranjero residente en España sin su consentimiento, y examinar sus papeles y efectos. Pero nada de esto podrá verificarse sino por la misma Autoridad o por un delegado suyo provisto de orden formal y escrita. En uno y otro caso el reconocimiento de la casa, papeles y efectos tendrá siempre que ser presenciado por el dueño o encargado de la misma, o uno ó mas individuos de su familia, y por dos vecinos de la propia casa ó de las inmediatas, si se hallasen en ellas, y en su defecto por dos vecinos del mismo pueblo.

No hallando en ella al dueño o encargado de la casa ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento a presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantándose acta del reconocimiento, que firmará con ellos la Autoridad o su delegado.

Cuando un delincuente contra el orden público fuere sorprendido infraganti, y perseguido por la Autoridad civil o sus subordinados o dependientes se refugiare en su propio domicilio o en el ajeno, podrán estos penetrar en él; pero sólo para el efecto de la aprehensión.

Art. 11.º Los deberes y atribuciones de la Autoridad en el estado de agitación, alarma, desorden o tumulto se subordinarán a lo que prescriben esta ley y el art. 181 del Código penal.

Art. 12.º Si la Autoridad civil, por vez empleados todos los medios de que en circunstancias ordinarias dispone, y los que para las extraordinarias le otorgan los precedentes artículos, no pudiese por sí sola, ni auxiliada por la judicial, dominar la agitación y restablecer el orden, lo prevendrá en un bando, que se publicará con la solemnidad posible, é inmediatamente después dispondrá que la militar proceda a la adopción de las medidas que reclame la paz pública, previa la declaración del estado de guerra.

Art. 13.º Cuando la rebelión o sedición se manifiesten desde los primeros momentos, rompan el fuerza los rebeldes ó sediciosos, ó comprenda la Autoridad civil la urgente necesidad de apelar a la fuerza y resignar el mando para dominarlos, se pondrá de acuerdo con la Autoridad judicial y la militar, y dispondrán la inmediata declaración del estado de guerra.

Si no hubiese acuerdo entre estas Autoridades, ni tiempo para tomarlo, se entrará desde luego provisionalmente en el estado de guerra en los dos primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al Gobierno y a las Autoridades superiores gerárquicas respectivamente.

Art. 14.º Si ocurriese la rebelión ó sedición en capital de provincia, la Autoridad civil, para los efectos del artículo anterior, lo será el Gobernador de la misma ó el que haga sus veces, y las Autoridades judicial y militar las superiores en el orden gerárquico. En los demás pueblos se reunirán para dicha declaración el Juez de primera instancia ó el decano si hubiere mas de uno, el Alcalde popular y el Jefe militar que ejerza el mando de las armas.

En el caso de que en dichos pueblos no existiere Autoridad militar que ejerza el mando de las armas, el Alcalde popu-

lar, Jefe superior de la Milicia, asumirá las facultades que corresponden según esta ley a la Autoridad militar en el estado de guerra.

Art. 15.º En la capital de la Monarquía y puntos donde residan el Rey ó la Regencia del Reino no podrá declararse el estado de guerra sin autorización del Gobierno.

El Gobierno, cuando hayan ocurrido actos de rebelión ó sedición en dos ó mas provincias, ó se hayan presentado grupos considerables de rebeldes ó sediciosos armados en ellas, determinará el territorio que queda sujeto al estado de guerra.

CAPITULO 2.º

Art. 16.º Recibida por la Autoridad judicial la comunicación a que se refiere el art. 4.º de esta ley, ó sin recibirla, si tuviere conocimiento de los sucesos antes de que llegue a su poder, el Juez ó Jueces de primera instancia de la población donde ocurran aquellos, dando cuenta al Regente de la Audiencia, se constituirán en sus Juzgados, acompañados de los Promotores fiscales respectivos y del Escribano que designen, aunque no esté en turno, pudiendo valerse de él ó de otro durante el procedimiento si creyeran que lo exige así la administración de justicia.

Art. 17.º Inmediatamente formarán los Jueces la correspondiente causa sobre delitos contra el orden público y los de rebelión y sedición si hubiere méritos para ello, dedicándose exclusivamente a este servicio preferente; a cuyo fin, si lo creyeran necesario, delegarán la jurisdicción para los demás negocios en el Juez de paz que corresponda.

Art. 18.º Darán aviso sin pérdida de tiempo a la Autoridad civil de hallarse constituidos en Tribunal, ofreciéndole su cooperación, y de estar formando causa sobre los sucesos que hayan producido la alarma ó el desorden, reclamándole los datos que crean convenientes para la pronta averiguación de los hechos criminales que sean objeto del procedimiento.

Art. 19.º Si los delitos contra el orden público ocurriesen en punto donde exista Audiencia territorial, se constituirá en sesión permanente la Sala de gobierno en el punto que el Regente designe, adoptando los acuerdos oportunos para la pronta sustanciación de las causas.

En otro caso los Regentes dictarán a los Jueces que conozcan de estas causas las órdenes conducentes al propio fin, dando cuenta a la Sala de gobierno para la aprobación ó reforma de dichas órdenes. A este propósito, la referida Sala se reunirá diariamente, mientras lo consi-

TITULO II.

Del estado de guerra.

Art. 20. Resignado el mando por la autoridad civil en la militar, y en los casos que se contrae al art. 15 de esta ley, quedará declarado en estado de guerra el territorio de la provincia en que ocurran aquellos sucesos, lo que se hará saber al público por medio de bandos y volantes que contengan las prevenciones y medidas oportunas.

Art. 21. En dicho bando se intimará a los rebeldes o sediciosos y perturbadores que depongan toda actitud hostil, y presten obediencia a la autoridad legítima.

Los que lo hicieren en el término que el bando fije, y no habiendo término señalado en el de dos horas, quedarán exentos de pena, excepto los autores o jefes de la rebelión, sedición o desorden, y los reincidentes en estos delitos.

Los autores y jefes referidos serán inculcados de la pena que les corresponda, caso de rendirse o otro del término que expresa el párrafo anterior, y sufrirán la inmediata inferior en su grado mínimo al medio. Los reincidentes quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad por el hecho de serlo.

Art. 22. Publicado el bando y terminado el plazo que en él se señala, serán disueltos a todo trance los grupos que se hubieren formado, empleando la fuerza; si fuere necesario, hasta reducirlos a la obediencia, prendiendo a los que no se entreguen, y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial cuando deban ser juzgados por ella, en la forma que se expresa en el tit. IV de esta ley.

Serán considerados como presuntos reos los que se encuentren o hubieren estado en los sitios del combate durante esto, sin perjuicio de probar su inocencia, hallándose en el mismo caso los que sean aprehendidos huyendo o escondidos, después de haber estado con los rebeldes o sediciosos.

Los habitantes de las casas en que se hubiesen hecho tales los rebeldes o sediciosos no serán considerados presuntos criminales por el solo hecho de haber estado en ellas, si no resultase haber tenido parte alguna en los delitos a que se refiere esta ley, sufrirá la pena correspondiente.

De excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo los individuos de las corporaciones municipales legalmente constituidas por el escrutio de los electores en la guerra.

Art. 23. Los autos de rebelión y sedición, los autos de rebelión y sedición de cada una de las jurisdicciones respectivas, según las leyes de la Constitución y en la forma de la ley de 18 de mayo de 1862, y en la forma de la ley de 18 de mayo de 1862.

Art. 24. La autoridad civil o militar, cualquiera que sea su autoridad o cargo, prestará inmediatamente, a la autoridad militar como a la civil, la ayuda que estas le piden para sofocar la rebelión o sedición y restablecer el orden.

El funcionario o corporación que no prestase inmediato auxilio a la autoridad superior militar o civil, será en todo caso penado de suspensión o cargo, y reprobado de su empleo, y reprobado de su empleo, y reprobado de su empleo.

Art. 25. Las autoridades civiles y militares, funcionarios en todas las asambleas, los propios de sus ayuntamientos que no se hallen en orden público, no podrán ser considerados como culpables de los delitos que se refieren en este artículo.

biendo en uno y otro caso darla directamente los partes y volantes que correspondan, y las demás que con referencia al orden público lleguen a su conocimiento.

Art. 26. La Autoridad militar, a la vez que adopte las medidas comprendidas en los artículos precedentes y que restablezca el orden y el prestigio de la Autoridad, podrá disponer que se inculquen a los rebeldes o sediciosos a que hay lugar, y se formen los Comités de guerra que han de fallar las causas que correspondan a la jurisdicción militar, según lo que expresan los artículos siguientes.

Art. 27. Los Consejos de guerra ordinarios fallarán las causas en que, siendo la rebelión de carácter militar, aparezcan reos de estos delitos o sus autores, y los jefes de la rebelión y líderes en activo servicio, cualquiera que sea su situación y categoría.

Las causas a que se refiere el párrafo anterior se considerarán de carácter militar, cuando los rebeldes o sediciosos estén mandados por jefes militares, y cuando el movimiento se inicie o sostenga por fuerzas armadas del ejército o de la Milicia popular.

Art. 28. También quedan sujetos a la jurisdicción de los Consejos de guerra ordinarios, con arreglo a Ordenanza, los jefes, los oficiales de la Milicia popular armada o los que en su defecto y de cualquier modo hagan veces de tales, y los rebeldes o sediciosos que en número mayor de 12 individuos se levanten en armas o sostengan con ellas la bandera de la rebelión y sedición en desobediencia a las órdenes de las autoridades públicas, sean o no del ejército permanente, destinadas a su persecución, ya por los Autoridades militares, ya por las civiles.

Los jefes principales de una rebelión o sedición armada de carácter no militar, durante el período de guerra, quedan también sujetos al Consejo de guerra ordinario.

Art. 29. Todos los demás milicianos populares armados, y los que sin pertenecer a la Milicia popular tomen parte con armas y en poblado en una rebelión o sedición, sean o no de carácter militar, se hallan en resistencia a las fuerzas públicas, serán juzgados y sentenciados también por el Consejo de guerra ordinario, siguiendo en el procedimiento los trámites que señalan las Ordenanzas militares y disposiciones especiales que le determinan.

Este Consejo de guerra se compondrá de cuatro Capitanes nombrados por la Autoridad militar, el Juez de primera instancia, el juez de paz y el Promotor fiscal, mas antiguo en el pueblo cabeza de partido judicial donde el Consejo se celebre, o quien haga sus veces.

Si el Juez de paz no fuere letrado, le reemplazará según el número de orden, el suplente que lo sea; si no lo hubiere, asistirá al Consejo el Juez de paz o suplente letrado del año o años anteriores; y no habiendo tampoco, el Abogado mas antiguo del pueblo donde se celebre.

Será Presidente del Consejo el Vocal que según las leyes civiles y militares fuere de mayor categoría. Y si sobre esto ocurriera duda, el que disfrutase mas sueldo por razón de su empleo. Disfrutando sueldo igual, el mas antiguo en el empleo que no disfrutase sueldo.

Los procesados podrán hacer la defensa por medio de tres Abogados, o letrados en ejercicio que nombren, no pudiéndose nombrar su Abogado de nombrar de letrado a uno de los Abogados de la defensa.

Art. 30. Todos los delitos que se consideren responsables en cualquier concepto de los ex reos, de los autores de la rebelión y sedición, y de los que se hallen en la jurisdicción militar, y conculados por la jurisdicción militar, y conculados por la jurisdicción militar, y conculados por la jurisdicción militar.

En su consecuencia, si instruidas las diligencias oportunas por mandato de la Autoridad militar, apareciesen complicados como reos de los expresados delitos personas no comprendidas en los tres precedentes artículos, los Fiscales de las causas harán expedir inmediatamente los oportunos testimonios del tanto de culpa, y los remitirán al Juez de primera instancia que corresponda por conducto de la Autoridad militar superior, la que con toda seguridad pondrá los pertinentes a disposición de dicho Juez de primera instancia para los efectos de justicia.

Art. 31. La Autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las mismas medidas que la civil, y las demás a que esta ley la autoriza. Cuidará muy especialmente de que los Jefes o Comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, ya a disposición de su autoridad, ya a la de la ley o judicial, lo permitan con toda seguridad al punto de su destino; y cuando no llegaren a él, mandará que se formen las causas oportunas para averiguar y castigar las faltas y delitos que en este delicado servicio se cometan, cualquiera que sea la clase del Jefe que lo cometa.

Art. 32. Para declarar levantado el estado de guerra, luego que hayan terminado la rebelión o la sedición, se celebrará previamente un Consejo por las Autoridades militar, civil y judicial de la capital de la provincia declarada en dicho estado de guerra; y si hubiere unanimidad de votos, se llevará a cabo el acuerdo, dándose inmediatamente cuenta al Gobierno.

Si el acuerdo no fuese por unanimidad, sino por mayoría de votos, no se llevará a cabo interin el Gobierno, a quien se dará traslado en cuenta con urgencia, no resolviendo lo que corresponda en Consejo de Ministros.

Solo al Gobierno corresponde levantar el estado de guerra cuando haya hecho la declaración en los casos que determinan el art. 15.

Art. 33. Levantado que sea el estado de guerra, serán remitidos a los Juzgados competentes para su continuación y delimitación de justicia, todas las causas contra aquellas personas que se hallen sometidas al Tribunal excepcional por virtud de esta ley.

Art. 34. Las Autoridades civiles y militares no podrán en ningún caso establecer ni imponer otra penalidad que la prescrita anteriormente por las leyes.

TITULO III.

CAPITULO PRIMERO.

De los bandos que dictan las Autoridades, y de sus infracciones.

SECCION PRIMERA.

Art. 35. Las Autoridades civiles y militares, en el período de suspensión de garantías, publicarán además los bandos que consideren necesarios para mantener mejor el orden público, con sujeción estricta y bajo su responsabilidad, a las prescripciones constitucionales que no hayan sido suspendidas con arreglo al artículo 31 de la Constitución; estableciendo en dichos bandos las penas en que incurran los infractores, y las aplicarán gubernativamente.

Art. 36. En ningún caso podrán señalarse mayores penas que las siguientes: multa hasta 125 pesetas o arresto hasta ocho días, si dictare el bando un Alcalde popular.

Cuando sea el Gobernador de la provincia quien le dicte, podrá elevar la multa a 250 pesetas, y el arresto hasta 15 días, a la par o separadamente.

Art. 37. Los multados por infracción de bandos, que sean insolventes, sufrirán por vía de substitución el arresto, según lo prevenido en el art. 301 del Código penal.

El arresto por vía de substitución no podrá exceder de los días por que pue-

den imponerle aquellas Autoridades, respectivamente, conforme a lo prevenido en el artículo 301 del Código penal.

Art. 38. La Autoridad militar podrá corregir también del mismo modo y en la misma forma que la civil y con la limitación consignada en el art. 35 las infracciones de sus bandos en el período de estado de guerra, sin que puedan la superior del distrito y de la provincia señalar pena mayor que la de 15 días de arresto y 250 pesetas de multa, las dos a la par o una u otra, y las demás Autoridades militares en el mismo modo.

Caso de ser insolventes los multados, sufrirán el arresto por vía de substitución, sin que pueda exceder el que por tal concepto se imponga de los ocho o quince días señalados respectivamente en este artículo.

SECCION SEGUNDA.

Art. 39. Las Autoridades civiles y militares llevarán un libro en el que extenderán las providencias que acuerden imponiendo gubernativamente la multa y el arresto expresados, haciendo constar en ellos claramente el motivo de su imposición.

La providencia se hará saber gubernativamente al infractor por los dependientes o subordinados de aquellas Autoridades, entregándole copia literal de la misma. El infractor firmará el recibo de esta copia al pie de la diligencia que ha de extender el encargado de hacerle saber dicha providencia, si quisiera, o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego; si no quisiera, lo verificarán los testigos requeridos verbalmente por el encargado de hacer saber la providencia.

Art. 40. Si la primera diligencia en busca no fuere hallado el penado en su domicilio, se hará saber a cualquiera de sus familiares mayores de 18 años que murenen en la casa, con entrega de la copia legal de la providencia, y guardándose las reglas establecidas en el artículo anterior.

Si ni el penado ni ninguno de los familiares se encontrasen en la casa a la primera diligencia, se entregará a cualquiera de los vecinos mas inmediatos, o personas que habiten en las casas de estos y sean familiares mayores de 18 años.

Art. 41. Las providencias acordadas por las Autoridades superiores civiles de la provincia, la militar del distrito y el Comandante militar de una provincia o capitán de una plaza, no cabe recurso de alzada. Los infractores pueden, sin embargo, entablar recurso de revisión ante las mismas Autoridades, cuyo fallo en este caso será definitivo.

Art. 42. Las providencias de las Autoridades inferiores civil y militar, que impongan arresto, se llevarán a efecto desde luego.

Sin embargo de su ejecución, dichas Autoridades, con copia literal de la providencia, la comunicarán con las superiores respectivas en el mismo día, cuando posible, y los arrestados podrán acudir ante estas por escrito y por conducto de las inferiores exponiendo lo que tengan por conveniente. Las Autoridades inferiores dirigidas inmediatamente a su destino estas reclamaciones con su informe, y si se hubieren deslizo de las primeras 24 horas de la ejecución de sus providencias, pasarán la consulta limitada a dar a las superiores las diligencias respectivas en que se impongan multas menores de 30 pesetas o arrestos también desde luego, y se observará respecto a ellas lo determinado en el artículo anterior.

Las providencias en que se imponga una multa mayor de 30 pesetas no se llevarán a efecto hasta que la Autoridad superior respectiva, recibida la consulta o la reclamación en su caso hecha por el multado en las primeras 24 horas siguientes a la notificación, con el informe de

la Autoridad que impuso la multa, con-
firme, modifique ó revoque dicha pro-
visión, cuya superior resolución será
de apelación sin ulterior recurso.
Art. 40. Toda multa impuesta por la
Autoridad judicial ordinaria en la
causa por los delitos que se ex-
presan en el art. 2.º de esta ley.

TÍTULO IV.

Del procedimiento ante la Au-
toridad judicial ordinaria en la
causa por los delitos que se ex-
presan en el art. 2.º de esta ley.

CAPÍTULO PRIMERO.

Art. 41. El procedimiento en las
causas que forman la jurisdicción ordina-
ria por los delitos que se expresan en
el art. 2.º de esta ley será el que ex-
presan los artículos siguientes.

SECCION SEGUNDA.

Art. 42. El Juez de primera instan-
cia del partido ó distrito en que hubiere
principiado la subversión del orden es
el competente para conocer de la causa.

Donde haya dos ó mas Jueces, si la
rebelión ó sedición estallare á un mis-
mo tiempo en dos ó mas distritos judi-
ciales, los Jueces respectivos instruirán
inmediatamente las primeras diligencias
sumarias, que directamente pasarán al
mas antiguo de ellos á quien para este
caso se declara competente.

El Gobierno y las Salas de gobierno
de las Audiencias pueden sin embargo
conocer el conocimiento de la causa al
Juez de primera instancia que conside-
ren conveniente, conforme al art. 39 del
reglamento provisional de 26 de diciem-
bre de 1835.

Art. 43. En las causas de esta clase
no podrá promoverse contienda de com-
petencia.

Si un Juez reclamare el conocimiento
de la causa, remitiéndola ya otro, y hu-
biere duda sobre cual de ellos sea el
competente, no podrán darse de acuerdo á
la primera comunicación que con tal
motivo se dirijan, pondrán el hecho sin
dilatación en conocimiento de la Audiencia,
por medio de exposición razonada,
para que la sala de gobierno, oyendo en
voz al Fiscal, decida en el acto lo que
estime procedente. Cuando los Jueces
pertenecan á diferentes territorios, ele-
varán directamente dicha exposición al
Ministerio de Gracia y Justicia para la
resolución oportuna. Mientras tanto cada
Juez continuará sus procedimientos que
hubiere iniciado.

Art. 44. En todo caso, los Jueces de
primera instancia en cuyo distrito ten-
ga lugar el delito, ó ocurran he-
chos juzgables por consecuencia del
mismo, instruirán las oportunas diligen-
cias, que pasarán al Juez competente
para conocer del delito principal.

Art. 45. Todo Juez que principie á
instruir diligencias en los casos preveni-
dos en los artículos anteriores, deberá cuen-
tar su nombramiento á la Audiencia del ter-
ritorio por conducto del Regente, y al
Jefe de la Sala de Gracia y Justicia.

Art. 46. La verificación que se hubiere
ya hecho del nombramiento al Juez
competente, y si faltare á este sin con-
sultar previamente con la Audiencia el
acto de inhibición.

Art. 47. Toda multa impuesta por la
Autoridad judicial ordinaria en la
causa por los delitos que se ex-
presan en el art. 2.º de esta ley, será de
apelación sin ulterior recurso. Toda multa
impuesta por la Autoridad judicial ordina-
ria en la causa por los delitos que se ex-
presan en el art. 2.º de esta ley, será de
apelación sin ulterior recurso. Toda multa
impuesta por la Autoridad judicial ordina-
ria en la causa por los delitos que se ex-
presan en el art. 2.º de esta ley, será de
apelación sin ulterior recurso.

Art. 48. Para la comprobación del
delito y de la delincuencia del presunto
reos en la causa por los delitos que se ex-
presan en el art. 2.º de esta ley, los Jueces
instruirán la evasación de las ci-
tas y autos que no sean de conocimiento

importancia, y todas aquellas diligencias
oposición, en el caso de ser favora-
ble para el reo, no habrán de alterar
la naturaleza del delito ni la respon-
sabilidad de su autor.

Art. 49. Toda persona, cualquiera
que sea su calidad y condición, cuando
fuere requerida para testigo en las
causas de que se trata, está obligada á
comparecer para este efecto ante el Juez
que de ella conozca, luego que sea citada
de orden del mismo, sin necesidad del
permiso previo de su jefe ó superior res-
pectivo.

Art. 50. La que fuere testigo, sin as-
tute impedimento, podrá ser com-
pelida por el Juez para que comparezca
ante él, incluso el de hacerla conducir
por la fuerza pública.

Art. 51. Todos los hallados de sus testi-
monios por declaración bajo juramento
en forma, expreso de fe de la Nación y
las Autoridades superiores, estas podrán
verificarlo por medio de certificación in-
forme ó comunicación oficial, sin necesi-
dad de comparecer personalmente ante
el Juez de la causa; aquel no puede de-
clarar ni informar.

Art. 52. Cuando sean varios los pro-
cesados, el Juez podrá acordar la forma-
ción de los sumarios separados que estime
conveniente para simplificar y activar
los procedimientos, pero que no se dilate el
castigo de los que resulten procesados ó
convictos.

Art. 53. En los delitos expresados en
el segundo artículo se procederá siem-
pre á la prisión preventiva de los que apa-
rezcan culpables, y no podrá acordarse
libertad durante la sustanciación de
la causa, bajo fianza ni caución alguna,
mientras duren los estados de alarma y
de guerra.

Art. 54. En cualquier estado de la
causa en que aparezca la inocencia de
un procesado se suspenderá respecto de
él, declarando que el procedimiento no
le pare perjuicio, y poniéndole en liber-
tad sin costas algunas. Este sobreseimiento se consultará con el
tribunal superior, el propio tiempo que
la sentencia definitiva si hubiere otros
procesados.

Art. 55. Desde que principie el su-
mario se dará conocimiento al Promotor
fiscal, el cual tiene derecho á intervenir
de todo lo que se sigue en el auto, tanto
para promover y apelar la acción de
la justicia, como para oponer siempre
que el Juez lo estime, y lo será necesari-
amente para acordar lo que se ordina
en el artículo anterior.

Art. 56. Concluido el sumario se pa-
sará la causa al Promotor fiscal para que
formalice su acusación en un escrito
breve, que no podrá exceder de cinco
días.

Art. 57. Si en la acusación se pide
se la imposición de alguna de las penas
contempladas, se hará lo que previene
las reglas 3.ª, 32.ª y 40.ª de la ley pro-
visional para la aplicación del Código pe-
nal.

Art. 58. Cuando varios los procesados se pi-
diese contra uno la imposición de penas
aflictivas y contra otros la de penas cor-
reccionales, y no fuese conveniente for-
mar pieza separada para los de esta pe-
nalidad, se pasará á la causa respectiva de
todo, la tramitación que se marca en
los artículos siguientes.

Art. 59. Fuera del caso expresado en
el párrafo primero del artículo anterior,
se dará traslado de la acusación al pro-
cesado para que haga su defensa, por
igual término que el concedido al Pro-
motor fiscal, haciéndole saber al propio
tiempo que en el acto de la notificación
nómbrense Procurador y Abogado, y si no
lo hubiere, se le nombrarán de oficio los
que se hallaren en turno.

Art. 60. Cuando sean varios los pro-
cesados, si pudieren hacer unidos su de-
fensa, se les obligará á que la verifiquen
bajo una misma dirección. No pudiendo
verificarlo de este modo, se incompa-
tibilidad ó oposición entre ellos, si hubie-
ren de hacerse más de dos defensas, dis-
pondrá el Juez que en vez de comparecer
se, el proceso al defensor de cada parte
se ponga de manifiesto á los respectivos
defensores en el oficio del Escribano por
el término que aquel señale, sin que
pueda pasar de ocho días, dentro del
cual deberán formalizarse todas las de-
fensas. En este caso los autos estarán de
manifiesto en el oficio del Escribano du-
rante 18 horas en cada día para que los
defensores puedan leer y por sí mismos
y sacar las copias ó apuntes que crean
convenientes, acordando el Escribano las
precauciones oportunas para evitar abu-
sos.

Art. 61. Por medio de oficio, en
los escritos de acusación y defensa debe-
rá, necesariamente, en la parte de declarar
toda prueba que le conviniera ó renun-
ciar á ella, expresando además si se con-
forma ó no con todas las declaraciones
de los testigos del sumario, y con cuáles
de ellas está conforme, si no lo estuviera
con alguna, no haciendo ni lo uno ni lo
otro, se entienda que renuncia la pro-
ba y están conformes con las declara-
ciones del sumario.

Art. 62. Si las partes de consuno re-
nunciaren la prueba y se conformaren
con todas las declaraciones del sumario,
ó nada dijeren sobre estos extremos por
noticias en sus escritos de acusación y de-
fensa, habrá el Juez por concluida la cau-
sa desde luego, y sin otro trámite man-
dará llevar los autos á la vista, con cita-
ción de las partes para sentencia.

En otro caso, recibirá la causa á pro-
ba, con calidad de los cargos por un
término breve, que aunque se prorogue,
no podrá exceder de 30 días, admitien-
do de las pruebas propuestas solamente
las que estime pertinentes y de notoria
influencia en el resultado del proceso.

Art. 63. Dentro de las 24 horas si-
guientes á la notificación del auto, re-
biendo la causa á prueba, presentará
cada parte por duplicado lista de los tes-
tigos de cargo ó de descargo que intente
valerse para su prueba respectiva, ex-
presando la vecindad, estado, profesión,
oficio ó modo de vivir de cada uno de
ellos. Un ejemplar de estas listas se en-
tregará á los autos, y el otro se entregará á
la parte contraria para la oposición de
las tachas á los testigos que las tuvieren
y demás efectos convenientes. No se ad-
mitirán mas testigos que los contenidos
en dicha lista, y los que de ellos se pre-
sente dentro del término de prueba se-
rán examinados, aun pasado aquel tér-
mino, en el día ó los días siguientes.
Tampoco podrán admitirse mas de 10
testigos por cada pregunta útil.

Art. 64. El examen de los testigos
de cargo y de descargo, y la ratificación de
los del sumario con cuyas declaraciones
no se hubiesen conformado las partes,
contran efecto en audiencia pública, con
asistencia del Promotor fiscal. También
podrán asistir el procesado ó su Procura-
dor y Letrado, si le conviniera.

A este fin, presentadas las listas de
testigos, el Juez señalará el día mas
próximo posible para la comparecencia
y examen ó ratificación de los mismos.

Los del sumario serán citados de ofi-
cio, como también los de cargo que pre-
sente el Promotor fiscal; los otros serán
presentados por la parte interesada, la
cual, sin embargo, podrá decir que se
compela y apremie á los que renuncen
comparecer á declarar.

Art. 65. Los testigos que no se ha-
llaren á mas distancia que la de un día
de viaje de la residencia del juzgado, se-
gún los medios de comunicación estable-
cidos, serán compelidos á comparecer
forzosamente, no mediando razones jus-
tas que lo impidan; y también cuando á
reclamación de alguna de las partes es-
timase el Juez indispensable para el cargo
ó descargo la comparecencia personal.

Art. 66. Los demás testigos se exa-
minarán por medio de exhortos, diligen-

ciándose estos con la mayor urgencia
por los Jueces exhortados, bajo su ma-
xima responsabilidad; pasado el tér-
mino de prueba, sin haber sido depuestos
el Juez exhortado, seguirá sin ellos el pro-
cedimiento, y dará por concluido el exa-
men de los testigos al Regente de la Audiencia.

Art. 67. En el día y hora señalados
al efecto se procederá á la ratificación y
examen de los testigos, ratificando el
cada uno de ellos con su declaración. Con-
cluida la declaración de cada testigo, la
parte ó sus defensores podrán hacer al
mismo, por conducto del Juez, las pre-
guntas que este admita, como pertinen-
tes, extendiéndose así la pregunta como
la contestación. También se escribirán
las preguntas que el Juez desche como
improcedentes, si la parte interesada lo
reclamare, á fin de que la superioridad
pueda apreciarlas en su día.

Art. 68. La prueba de tachas se ha-
rá en su caso acto continuo de la prin-
cipal y dentro del término que este, se-
ñalando por escrito previamente la par-
te interesada las preguntas á cuyo tenor
deban ser examinados los testigos que
presentare para dicha prueba.

Art. 69. Concluido el término de pro-
ba, ó practicada toda la que hubieren
propuesto las partes, aunque aquel no
haya espirado, lo acreditará el Escriba-
no por diligencia; y sin otro trámite pre-
sará los autos al estudio del Juez para
sentencia, haciéndole saber á las partes.

Art. 70. Dentro de los dos días si-
guientes, si el Juez hallare en la causa
defectos sustanciales que embasar, ó sal-
tar en algunas diligencias precisas para el
cabal conocimiento de la verdad, acor-
dará que, para mejor proveer, se practi-
quen inmediatamente todas las que fun-
ren indispensables, bajo su responsabi-
lidad en el caso de dar margen con esto á
innecesarias dilaciones.

Art. 71. Pasados estos días, el Juez
señalará día y hora para la vista pública
dentro de los tres siguientes. Durante
este tiempo estarán los autos de manifiesto
en la escribanía para que la parte fi-
scal ó los defensores se instruyan y tomen
las notas convenientes, guardando lo pre-
venido para su caso en el art. 61 de
esta ley. Las costas que devenguen en
este acto los curiales se declaran de oficio.

En el acto de la vista podrán informar
oralmente de su derecho al Juez ó Tri-
bunal los defensores nombrados por los
procesados por el orden seguido en el
procedimiento escrito.

El Promotor fiscal y los defensores
nombrados de oficio deberán informar
necesariamente, guardando el mismo or-
den.

Art. 72. El Juez dictará sentencia
que deberá ser fundada, dentro de los
cinco días siguientes al de la conclusión,
del acto de la vista.

En la propia sentencia mandará tam-
bien que se remitan los autos en consul-
ta al Tribunal superior, con citación y
emplazamiento de las partes para que
comparezcan ante él dentro de tres días
si la Audiencia residiera en la misma
población, y dentro de seis días en otro
caso.

Art. 73. El emplazamiento se hará á
los Procuradores de los procesados, si
estos no fueren hallados á la primera di-
ligencia en busca; y al verificarlo, los Es-
cribanos les proveerán que nombren
Procurador y Abogado que defiendan á
sus representados en el Tribunal supe-
rior, bajo apercibimiento de nombrar-
seles de oficio, admitiéndoles dicho nom-
bramiento, si lo hicieren, en el acto de
la notificación.

Art. 74. Las causas contra reos au-
sentes se sustanciarán por los mismos
trámites determinados en los anteriores
artículos, pero no se ratificarán mas tes-
tigos del sumario que aquellos con cuyas
declaraciones no se hubiesen conforma-
do el Promotor ó los procesados pro-
sentes.

Art. 75. Los Jueces tendrán el tér-

mino de 24 horas para dictar las providencias interlocutorias.
Contra ellas no se admitirá mas recurso que el de reposición y apelación.
La apelación solo se admitirá en un efecto, y para sustanciarla se esperará a que se remitan los autos a la Audiencia en consulta de la sentencia definitiva.
Contra las providencias denegatorias de prueba no se da recurso alguno; pero la parte agraviada deberá formular ante el inferior la oportuna protesta para que, repudiada su petición en la segunda instancia, pueda recaer decisión sobre ella.

SECCION TERCERA. De la segunda instancia.

Art. 77. Recibidos los autos en la Audiencia, se pasarán sin dilación al Relator para que forme el apuntamiento en el término que la Sala les señale, atendiendo al volumen de los autos, pero sin que pueda exceder de ochos días.
Art. 78. Devueltos los autos, por el Relator, se comunicarán al Fiscal y a cada una de las partes para instrucción, por un breve término, que no podrá exceder de seis días para cada uno.
En el caso de ser mas de dos las defensas, se practicará lo prevenido en el artículo 61.
Al propio tiempo se hará el nombramiento de Procurador y Abogado de oficio para los procesados que no lo hubieren verificado por sí mismos o por su Procurador.
Art. 79. Al devolverse los autos, o al darse por instruida de ellos cada parte, manifestará, bajo la firma de su Letrado y Procurador, su conformidad con el apuntamiento, o las omisiones o inexactitudes que a su juicio puedan haberse cometido en él, pudiendo en este caso ser reemplazados.
Art. 80. También podrán las partes, al devolver los autos, o darse por instruidas, o pedir que se reciba la causa a prueba.
Este reemplazo a prueba en la segunda instancia solo podrá tener lugar para justificar hechos nuevos de potencia influencia en el resultado de la causa, protestando no haber tenido conocimiento de ellos en tiempo oportuno para alegarlos y probarlos en la primera, y sobre los hechos no admitidos por el Juez en primera instancia cuando se hubiere hecho la protesta expresada en el art. 76.
Art. 81. La Sala designará un Ministro ponente, el cual informará, sobre la reforma o adiciones del apuntamiento y sobre la procedencia de la prueba que se hubiere solicitado.
El Ministro ponente ejercerá las demás funciones propias de este cargo.
Art. 82. Si la Sala estimase procedente la propuesta, mandará practicarla recibiendo para ello la causa a prueba por un breve término, que, aunque se prolongue, no podrá exceder de 20 días.
La prueba en este caso se practicará con las mismas formalidades que en la primera instancia ante el Ministro ponente, o dándose comisión al Juez inferior del punto donde se hallen los testigos.
Art. 83. Conformes las partes en el apuntamiento, o hechas en él las reformas acordadas, o adicionado en su caso con las pruebas practicadas en la segunda instancia, se señalará para la vista el día mas próximo posible, con citación de las partes.
En el acto de la vista informarán de palabra, primero el Fiscal y después los defensores de los procesados, por el mismo orden que hubieren guardado en la primera instancia. Caso de haber apelado alguna de las partes, su defensor únicamente usará de la palabra antes que el Fiscal.
Art. 84. Estas causas se verán precisamente por cinco Magistrados, debien-

do ser uno de ellos el Regente o el que haga sus veces.
Si en la Sala a que correspondiera no hubiere número suficiente de Ministros, se agregarán los mas antiguos de las otras hasta completarla, con exclusion de los Presidentes si hubiere número suficiente para ello.
Art. 85. Concluida la vista, la Sala dictará sentencia fundada dentro del término de seis días.
Esta sentencia causará ejecutoria.
Art. 86. Dictada la sentencia, se remitirá sin dilación, con certificación de ella, al Juez inferior para su ejecución y cumplimiento, sin perjuicio de la tasación de costas y gastos del juicio.
Hecha esta y aprobada, se devolverá la causa al Juez inferior con la certificación correspondiente.
Art. 87. Contra las providencias interlocutorias de las Audiencias en las causas de que se trata no se admitirá mas recurso que el de reposición para ante la misma Sala, si se interpusiere dentro del segundo día.
Art. 88. Los Jueces y Tribunales no tendrán para estas causas horas determinadas de despacho y utilizarán el día y la noche por todo el tiempo que sea necesario según la urgencia del caso, a juicio de los mismos.
Art. 89. Sobre los demás puntos respectivos al procedimiento en estas causas ante la Autoridad judicial que no se hallen expresamente marcadas en la presente ley se observarán las reglas establecidas en los procedimientos comunes y en la ley provisional para aplicación del Código penal, sin que se acuda a ninguna otra ley especial.
Art. 90. Quedan derogadas las leyes, decretos, órdenes y otras disposiciones publicadas hasta el día sobre el procedimiento en las causas que se forman por la jurisdicción ordinaria y por los delitos a que se refiere esta ley.
ARTICULOS ADICIONALES.
Artículo 1.º Las disposiciones precedentes sobre el procedimiento regirán hasta que se plantee el juicio por jurados, como prescribe el art. 95 de la Constitución; en cuyo caso se modificarán las de esta ley, según lo requieran la organica de Tribunales y la de procedimiento en materia criminal.
Art. 2.º Establecido por una ley, el recurso de casación en materia criminal, se acomodará la presente a las prescripciones que se dicten en aquella, salvadas las modificaciones que se creyere conveniente introducir a fin de asegurar la celeridad, economía y sencillez de la tramitación en las causas sobre los delitos que son objeto de esta ley.
Art. 3.º La presente ley no abraza los casos de guerra extranjera, ni de guerra civil formalmente declarada.
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino para su promulgación como ley.
Palacio de las Cortes 20 de abril de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Perti, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Mariano Rius, Diputado Secretario.
Por tanto, Mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como

militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.
Madrid 25 de abril de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero.
D. Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes Soberanas, a todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la Nación española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:
Artículo 1.º Serán llamados al servicio de las armas para cubrir las bajas del ejército permanente en el año actual 40.000 hombres.
Art. 2.º Todas las provincias de España, a excepcion de las Vascongadas, contribuirán a llenar este contingente en la forma y modo que establezca la ley de organización y reemplazo del ejército, votada y sancionada por las Cortes Constituyentes el 24 de marzo último.
Art. 3.º La repartición de cupos respectivo se hará por el Ministerio de la Gobernación con arreglo al número de mozos sorteados, en este mismo año, tomándose al efecto por dicho Ministerio todas las medidas necesarias para la exactitud de aquella operación.
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino para su promulgación como ley.
Palacio de las Cortes 20 de abril de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Perti, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Mariano Rius, Diputado Secretario.
Por tanto, Mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.
Madrid 25 de abril de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero.
Se anuncia la terminación de las obras de fábrica, explanación y afirmado del camino de Verín a la Rasela, por el cual tiene que pedir indemnización de daños y perjuicios contra el contratista.
Negociado 2.º
Recibidas definitivamente las obras de fábrica, explanación y afirmado del camino vecinal que desde Verín se dirige a la Rasela por el Campo santo, esta Diputación ha dispuesto hacerlo público a medio del presente anuncio, para que dentro del plazo de quince días puedan acudir ante

la misma en reclamación de daños y perjuicios contra Don Bernardo Vidal contratista de dichas obras, los propietarios que no hubieren sido aun indemnizados; pues trascurrido el término de que queda hecho mérito se devolverá la fianza constituida en garantía de tal cumplimiento.
Orense abril 29 de 1870.—El Gobernador presidente, José Casal.
Por acuerdo de la Excm. Diputación provincial, Claudio Perian, de, Secretario.
ANUNCIOS OFICIALES.
COMANDANCIA MILITAR DE LA PROVINCIA DE ORENSE.
Bulto González o su mujer, Isabel, casada, naturales del pueblo de Cabada, parroquia de San Adrian de esta provincia, a quienes, del soldado del primer batallón del regimiento de Tarragona del ejército de Cuba, Joaquín González Lozada, deben recoger en esta Comandancia militar un documento que les interesa y que no puede remitirse por ser de cosa de dicho pueblo, y el Ayuntamiento a que pertenece.
En su consecuencia, los señores Alcaldes de la provincia se servirán averiguar el paradero de dichos individuos, y el cuyo distrito municipal se encuentren, lo pauten para de oficio.
Orense 27 de abril de 1870.—El Coronel Comandante militar, Costa.
Ayuntamiento de Padernabaz.
Este Ayuntamiento reunido hoy con los individuos de la junta municipal de territorio a fin de proceder con acierto, en la forma de la repartición del año próximo de 1870 a 1871, acordó por unanimidad reclamar de todos los terratenientes, en el distrito, vecinos y forasteros, salaciones de la riqueza que disfruten como propietarios o colonos expresivos de su valor en venta deducidas las pensiones, para lo que conceda quince días de término que principien a contar desde que este anuncio aparezca inserto en el Boletín oficial de la provincia; advirtiéndole que no verificado en dicho término, se procederá a la evaluación de oficio y haga la junta las imposiciones sin que después atienda a reclamaciones respecto de las que no los presenten; y para conocimiento de todos, anunciarlo como lo verifíco en el expresado periódico y pito de costumbre de esta alcaldía.
Padernabaz 24 de abril de 1870.—El Alcalde, Cayetano Vidal.—P. A. D. C., Fernando Arias y Arias, Srío.
Ayuntamiento de Boborás.
Debiendo procederse a la rectificación del amillaramiento que ha de servir de base para el reparto de la contribución territorial del año económico de 1870 a 1871, se hace saber a todos los vecinos y forasteros que en el preciso término de quince días a contar desde el en que se inserte en el Boletín oficial de la provincia, presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento las relaciones juradas que previene la ley; en inteligencia que de no hacerlo les parará el perjuicio consiguiente.
Boborás abril 18 de 1870.—El Alcalde, Paulino Taboada.
IMPRESA DE D. FRANCISCO FAZ.